



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

SENTENCIA TC/0398/17

Referencia: Expediente núm. TC-04-2015-0209, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Mamerto Bocio Medina contra la Sentencia núm. 220, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015).

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017).

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185, numeral 4, de la Constitución y 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:

I. ANTECEDENTES



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La Sentencia núm. 220, objeto de este recurso de revisión constitucional, fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), y declaró inadmisibile el recurso de casación interpuesto por el actual recurrente. En su dispositivo, la referida sentencia establece:

Primero: Declara inadmisibile el recurso de casación interpuesto por el señor Mamerto Boció Medina, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 27 de marzo de 2014, en atribuciones laborales, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo;

Segundo: Compensa las costas.

Esta decisión judicial fue notificada al recurrente, Mamerto Bocio Medina, mediante el Acto núm. 341-15, del tres (3) de julio de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Carlos Manuel Metivier Mejía, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N.

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El presente recurso de revisión constitucional contra la prealudida sentencia núm. 220 fue incoado mediante instancia, del veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), por el recurrente Mamerto Bocio Medina, siéndole notificado a la parte recurrida, Compañía de Seguridad y Tecnología HB (COMSETEC), mediante el Acto núm. 498-15, del veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015),



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

instrumentado por el ministerial Carlos Manuel Metivier Mejía, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N.

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante su Sentencia núm. 220, del veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), declaró inadmisibile el recurso de casación del actual recurrente por no alcanzar las condenaciones los veinte (20) salarios mínimos requeridos para el ejercicio de este recurso en materia laboral, arguyendo los motivos siguientes:

Considerando, que el artículo 641 del Código de Trabajo, declara que no serán admisibles los recursos de casación contra las sentencias cuyas condenaciones no excedan de veinte salarios mínimos... Considerando, que la sentencia impugnada confirmó en todas sus partes la decisión rendida en primer grado, la cual condenó a la recurrida a pagar a favor del señor Mamerto Boció Medina, los siguientes valores: a) Cuatro Mil Novecientos Nueve Pesos con 10/100/ (RD\$4,909.10) por concepto de vacaciones; b) Mil Ochocientos Ochenta Pesos con 10/100 (RD\$1,880.10), por concepto de Salario de Navidad del año 2013; c) Quinientos Setenta y Ocho pesos con 73/100 (RD\$578.73), por la participación en los beneficios de la empresa del año 2012; para un total de Siete Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos con 93/100 (RD\$7,367.93); Considerando, que en el caso de la especie al momento de la terminación del contrato de trabajo, regía la Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios en fecha 18 de mayo de 2011, que establecía un salario mínimo de Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos con 00/100 (RD\$8,356.00) mensuales, para los trabajadores que prestan servicios como vigilantes, por lo que el monto de veinte salarios mínimos ascendía a Ciento Sesenta y Siete Mil



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ciento Veinte Pesos con 00/100 (RD\$167,120.00), suma que como es evidente, no es excedida por la totalidad de las condenaciones que impone la sentencia hoy impugnada a través de este recurso de casación, por lo que dicho recurso debe ser declarado inadmisibile, de conformidad con lo que prescribe el artículo 641 del Código de Trabajo.

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

El recurrente en revisión constitucional, Mamerto Bocio Medina, pretende la anulación de la referida sentencia núm. 220, bajo los siguientes alegatos:

Como se evidencia la Suprema Corte de Justicia a pesar de enunciar en su sentencia los medios de casación desarrollados por el recurrente, no los copió íntegramente, no los ponderó, no los Juzgó, no los examinó, por lo que incurrió en violación a la Constitución Política de la República Dominicana, concerniente al sagrado derecho de defensa, que prescribe la Carta Sustantiva de la Nación en su Art.69.4, según el cual: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías que se establecen a continuación: 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. Y violo sus propias decisiones que han sido constantes, en el sentido de que: Omisión de estatuir. Se produce cuando el tribunal no responde a conclusiones formales de una parte, constituyendo a la vez violación al derecho de defensa. Sent. 14 de abril 2004, B.J. 1121, Pags.487-495. Sentencia carente de base legal cuando el juez no se pronuncia sobre conclusiones formales de una parte. Sent.18 de Oct. 2006, B.J. 1150, Págs.1519 - 1524. Cometiendo de paso una infracción constitucional. g)



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La sentencia No.220, del año 2015, Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, atacada en revisión Constitucional, carece de motivos suficientes y razonables, por lo que dicha sala violó un precedente del Tribunal Constitucional, lo que constituye violación al debido proceso según criterio del Tribunal Constitucional, en el sentido de que toda sentencia debe estar debidamente motivada, según la sentencia No.TC0009/2013, mediante la cual el TC admitió un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por MALESPIN CONSTRUCTORA S.A. y MARCOS E. MALESPIN, contra la resolución No.830/2012, dictada por las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de enero 2012 y anuló dicha resolución por falta de motivos.

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional

No consta depositado en el presente expediente escrito de defensa alguno de la parte recurrida, Compañía de Seguridad y Tecnología HB (COMSETEC), no obstante haberle sido notificado el actual recurso de revisión constitucional mediante el Acto núm. 498-15, del veintidós (22) de julio de dos mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Carlos Manuel Metivier Mejía, alguacil ordinario de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del D.N.

6. Pruebas documentales

En el expediente del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional constan depositados los siguientes documentos:



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Sentencia núm. 234/2013, dictada por el Juzgado de Trabajo de San Cristóbal el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), que condena a la sociedad recurrida al pago de prestaciones laborales por dimisión.
2. Sentencia núm. 55-2014, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), que confirma la decisión de primer grado.
3. Recurso de casación interpuesto por el recurrente, Mamerto Bocio Medina, el cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014).
4. Demanda por dimisión justificada y pago de prestaciones laborales incoada por el señor Mamerto Bocio Medina el dos (2) de abril de dos mil trece (2013).
5. Carta de dimisión del señor Mamerto Bocio Medina, del veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013).

**II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

7. Síntesis del caso

El actual recurrente laboró para la sociedad recurrida como oficial de seguridad por espacio de un (1) año y dos (2) meses, hasta que su contrato de trabajo culminó por dimisión. El recurrente interpuso una demanda en pago de prestaciones laborales ante el Juzgado de Trabajo de San Cristóbal, la cual fue rechazada en cuanto a las prestaciones por dimisión, pero acogida en cuanto al pago de los derechos adquiridos (vacaciones, regalía pascual y bonificaciones). El trabajador recurrente, inconforme con el fallo, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San



República Dominicana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cristóbal, la cual rechazó el recurso. Esta decisión fue impugnada por el recurrente ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisibile el recurso de casación interpuesto por no alcanzar las condenaciones de la sentencia los veinte (20) salarios mínimos exigidos por el artículo 641 del Código de Trabajo. Esta decisión judicial es objeto del presente recurso de revisión constitucional.

8. Competencia

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 y 277 de la Constitución, así como los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

Este tribunal estima que el presente recurso de revisión constitucional es inadmisibile por las razones siguientes:

a. El artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11 señala: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”. Asimismo, el cómputo de dicho plazo era franco y tomando en cuenta los días calendarios hasta que, mediante el precedente establecido en la Sentencia TC/0335/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), se estableció que del cómputo del plazo se excluían los días feriados y no laborables, solo computándose los días hábiles. Este criterio fue modificado mediante la Sentencia TC/0143/15, del once (11) de julio de dos mil quince



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(2015), que retomó el criterio anterior de computar dicho plazo como días calendarios.

b. Al tratarse de un recurso depositado el veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), el cómputo del plazo debe realizarse sobre la base de días calendarios. La Sentencia núm. 220 fue notificada al recurrente mediante el Acto de alguacil núm. 341-15, del tres (3) de julio de dos mil quince (2015), mientras que el presente recurso de revisión fue interpuesto el veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), es decir que transcurrieron apenas diecisiete (17) días; por tanto, el presente recurso fue incoado dentro del plazo hábil de los treinta (30) días a que alude el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.

c. En otro orden de ideas, y de conformidad con los artículos 277 y 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales está sujeto, en cuanto a su admisibilidad, a tres (3) requisitos:

- Que se trate de una sentencia revestida de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En este caso, la Sentencia núm. 220, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), a propósito de un recurso de casación, pone fin a un proceso laboral por dimisión, por lo que se cumple con dicho requisito.

- Que dicha sentencia hubiere sido dictada con posterioridad al 26 de enero del 2010, fecha de proclamación de la actual Constitución de la República. La sentencia impugnada fue rendida el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015).

- Que se trate de alguno de los casos señalados en el artículo 53 de la Ley No. 137-11. Estos casos son los siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2)



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

d. En cuanto al último de los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, el Tribunal advierte que el recurrente, Mamerto Bocio Medina, al interponer su recurso alegó que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia violó en su perjuicio las disposiciones constitucionales que le garantizan los derechos a la tutela judicial efectivo y al debido proceso, al omitir estatuir sobre sus medios de casación, lo que se traduce – a juicio del recurrente– en una violación a su derecho de defensa; lo que significa que en este caso se configura el numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que se refiere a la violación de un derecho fundamental imputable de modo inmediato y directo al órgano jurisdiccional que adoptó la decisión impugnada.

e. Este requisito de admisibilidad está sujeto, a su vez, a cuatro (4) condiciones:

- Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso. En este caso no fue posible su invocación porque las presuntas violaciones (derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por omisión de estatuir) fueron cometidas en la sentencia que decidió su recurso de casación por parte de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, el Tribunal ha desarrollado la doctrina de los requisitos inexigibles por imposibilidad de materialización y ha establecido al respecto:

La lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible. [Sentencia TC/057/12, del dos (2) de noviembre del 2012; Tribunal Constitucional dominicano]



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente. En este punto se aplica la misma doctrina esbozada en el párrafo anterior respecto de los requisitos inexigibles. El Tribunal ha señalado en la referida sentencia TC/0057/12 lo siguiente:

Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.

- Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional.

f. En cuanto a este último requisito instituido en el artículo 53, numeral 3, literal c), de la Ley núm. 137-11 y relativo a que la violación del derecho fundamental sea imputable al tribunal que conoció del caso, este tribunal advierte que la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación del actual recurrente, y que dictara la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante su Sentencia núm. 220, del veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), es sustentada en las disposiciones del artículo 641 del Código de Trabajo, que regula el recurso de casación en materia de trabajo y que condiciona la admisibilidad de dicho recurso al hecho de que las condenaciones insertas en la sentencia recurrida superen la cuantía de veinte (20) salarios mínimos. El tribunal *a quo* realizó un cálculo de los montos de la condenación ascendentes a siete mil trescientos sesenta y siete pesos dominicanos con 93/100 (RD\$7,367.93), por concepto de derechos laborales adquiridos, y que no alcanzaron la cuantía requerida legalmente, en tanto que supone una condenación superior a los ciento sesenta y siete mil ciento veinte pesos dominicanos con 00/100 (RD\$167,120.00), conforme al mayor salario mínimo del sector privado fijado en la suma de ocho mil trescientos cincuenta y



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

seis pesos dominicanos con 00/100 (RD\$8,356.00), conforme establecía la Resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de Salarios el dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011), vigente al momento de fallarse la presente sentencia recurrida en revisión constitucional.

g. En ese orden de ideas, es preciso señalar que este tribunal ha establecido el criterio de que cuando se trate de recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en los cuales se invoca violación de derechos por aplicación de disposiciones legales, como la establecida en el artículo 641 del Código de Trabajo, la circunstancia de que la Suprema Corte de Justicia declare inadmisibles un recurso de casación por no alcanzar las condenaciones insertas en el fallo recurrido los veinte (20) salarios mínimos no deviene en violación a ningún derecho fundamental y, por ende, esa circunstancia no puede ser interpretada como una falta imputable al órgano jurisdiccional. En efecto, en su Sentencia TC/0347/16, del veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Constitucional señaló:

(...) al no serle imputable, de modo directo e inmediato, a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la violación de derecho fundamental alguno en perjuicio de Wellington Mateo Ramírez, por haber aplicado de manera correcta una norma legal que aún se encuentra vigente, ni por haber rechazado la solicitud de revisión por error material, ha lugar a declarar inadmisibles el presente recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, pues este no satisfizo el requisito de admisibilidad exigido por el artículo 53.3, literal c), de la Ley núm. 137-11.

h. Este precedente constitucional fue reiterado en las sentencias TC/0350/16, del veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016); TC/0390/16, del once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016); TC/0429/16, TC/0431/16 y TC/0435/16, todas del trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Asimismo, este criterio



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

jurisprudencial es aplicable al presente caso por configurar un perfil factico idéntico al caso resuelto mediante la prealudida sentencia TC/0347/16, resultando obligatoria su aplicación en la especie, en virtud del *principio del stare decisis* contemplado en los artículos 184 de la Constitución y 31 de la Ley núm. 137-11. Por tales motivos, procede, como al efecto, declarar inadmisibile el presente recurso de revisión constitucional.

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta en acta el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisibile el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Mamerto Bocio Medina el veinte (20) de julio de dos mil quince (2015), contra la Sentencia núm. 220, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Mamerto Bocio Medina; y a la parte recurrida, Compañía de Seguridad y Tecnología HB (COMSETEC).

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO
VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO

Con el mayor respeto, en ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, tenemos a bien emitir un voto particular con relación a la decisión que antecede. Nuestro disenso radica en que, a nuestro juicio, la mayoría del Pleno interpretó erróneamente las condiciones de aplicación del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 al omitir considerar si en la especie hubo o no conculcación de un derecho fundamental, según dispone el párrafo capital de la indicada disposición legal.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional pronunció la inadmisibilidad del recurso de revisión de la especie, abordando en la sentencia los requisitos que exige la admisibilidad de una revisión constitucional de decisión jurisdiccional, de



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

acuerdo con las previsiones del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11. Sin embargo, al aplicar esta disposición se limita a declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto, fundándose en el literal *c* de la referida disposición, y obviando ponderar la condición previa de admisión prescrita en la parte capital del mismo artículo, que concierne a la circunstancia de que «se haya producido una violación de un derecho fundamental». En efecto, la sentencia que antecede solo establece que «[...] el recurrente [...] al interponer su recurso alegó que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia violó en su perjuicio las disposiciones constitucionales que le garantizan los derechos a la tutela judicial efectivo y al debido proceso, al omitir estatuir sobre sus medios de casación, lo que se traduce –a juicio del recurrente– en una violación a su derecho de defensa; lo que significa que en este caso se configura el numeral 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11 [...]»¹. Y luego pasa a pronunciarse respecto de los supuestos establecidos en los literales *a*, *b* y *c* de la indicada disposición legal. Sin embargo, estimamos que el requerimiento de que «se haya producido una violación de un derecho fundamental» exige que para la admisión del recurso exista por lo menos una probabilidad de vulneración a un derecho protegido por la Constitución.

Conviene recordar, como lo hemos establecido en múltiples votos anteriores², que para realizar el análisis preliminar y determinar si existe apariencia de buen derecho, no se plantea la necesidad de un examen exhaustivo o de fondo, sino más bien de un simple *fumus boni iuris* —es decir, de una apariencia de violación de derecho fundamental basada en un previo juicio de probabilidades y de verosimilitud—; pues la cuestión de declarar la certeza de la violación al derecho corresponde a la decisión que intervenga sobre el fondo del recurso de revisión. En otras palabras, se requiere que las circunstancias del caso concreto permitan prever que la decisión respecto del fondo del recurso declarará el derecho en sentido

¹ Véase el párr. 9.d de la sentencia que antecede.

² Véanse los votos emitidos respecto de las sentencias TC/0386/16, TC/0387/16, TC/0441/16, TC/0480/16, TC/0531/16, TC/0559/16, TC/0622/16, TC/0691/16, TC/0693/16, TC/0712/16, TC/0720/16, TC/0724/16, entre otros casos.



República Dominicana
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

favorable al recurrente; o sea, «que los argumentos y pruebas aportadas por la peticionaria tengan una consistencia que permitan al juez valorar [...] la existencia de un razonable orden de probabilidades de que le asista razón en el derecho solicitado»³. De modo que en esta etapa el Tribunal Constitucional no declara la certeza de la vulneración del derecho, sino que se limita a formular una hipótesis solo susceptible de ser confirmada cuando intervenga decisión sobre el fondo del recurso de revisión⁴.

En tal virtud, entendemos que la sentencia respecto a la cual emitimos el presente voto particular interpretó erróneamente el *modus operandi* previsto por el legislador en el aludido artículo 53.3, puesto que no llevó a cabo el análisis de si en la especie hubo o no la apariencia de violación a un derecho fundamental, como requiere la referida disposición legal.

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico.

Julio José Rojas Báez
Secretario

³ CASSAGNE (Ezequiel), *Las medidas cautelares contra la Administración*, en: CASSAGNE (Ezequiel) *et al.*, *Tratado de Derecho Procesal Administrativo*, tomo II, Buenos Aires, editorial La Ley, 2007. p. 354.

⁴Véase este aspecto desarrollado con mayor amplitud en el voto que anteriormente emitimos respecto de las sentencias TC/0039/15, TC/0072/15, entre otros casos.